

JOSÉ MARÍA JOVER ZAMORA
GUADALUPE GÓMEZ-FERRER MORANT
JUAN PABLO FUSI AIZPÚRUA

ESPAÑA: SOCIEDAD, POLÍTICA Y CIVILIZACIÓN (SIGLOS XIX-XX)

Segundo volumen dedicado al periodo 1850-1936

Este segundo volumen de la colección "España: Sociedad, Política y Civilización (siglos XIX-XX)" continúa la narración de la historia de España en el periodo comprendido entre 1850 y 1936. La obra se divide en tres partes principales: "La España de la Restauración", "La España de la Monarquía de Amadeo I y Alfonso XII" y "La España de Alfonso XIII".

La primera parte aborda la transición de la monarquía liberal a la monarquía de Alfonso XII, pasando por la restauración de la monarquía borbónica. Se analizan los cambios políticos, sociales y económicos que caracterizaron este periodo, así como las principales figuras políticas y culturales de la época.

La segunda parte se centra en la monarquía de Alfonso XII y su sucesor, Alfonso XIII. Se exploran las tensiones entre el poder real y las élites políticas, así como las luchas entre partidos y las crisis económicas que marcaron este periodo.

La tercera parte aborda la España de Alfonso XIII, un periodo que vio la consolidación del régimen monárquico y la expansión imperialista. Se analizan las tensiones entre el poder real y las élites políticas, así como las luchas entre partidos y las crisis económicas que marcaron este periodo.

Este segundo volumen es una obra fundamental para el estudio de la historia contemporánea de España, ofreciendo una visión completa y detallada del periodo comprendido entre 1850 y 1936.

ARETÉ

LA BATALLA DEL EBRO: LA VICTORIA FINAL	706
LA TRAGEDIA ESPAÑOLA	708
 EL FRANQUISMO: LA ETAPA TOTALITARIA (1939-1959)	
(Juan Pablo Fusi Aizpúrua)	
LAS FORMAS DE LA DICTADURA	714
ESPAÑA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL	719
LOS FUNDAMENTOS CULTURALES DEL FRANQUISMO	723
LA SUPERVIVENCIA DEL RÉGIMEN	733
LA CRISIS DE 1956-1959	738
 LA DÉCADA DEL DESARROLLO (1960-1970)	
(Juan Pablo Fusi Aizpúrua)	
EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN (1959)	743
LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	745
LOS LÍMITES DEL DESARROLLO	750
LA SOCIEDAD INDUSTRIAL	753
EDUCACIÓN	758
POLÍTICA SOCIAL	761
 EL RÉGIMEN AUTORITARIO (1960-1975)	
(Juan Pablo Fusi Aizpúrua)	
DEL CONFORMISMO AL CONFLICTO	768
EL FRACASO DEL DESARROLLO POLÍTICO	776
LA ETAPA CARRERO BLANCO (1969-1973)	786
EL GOBIERNO ARIAS NAVARRO (1974-1975)	791
 LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1982)	
(Juan Pablo Fusi Aizpúrua)	
EL FRACASO DE ARIAS	802
LA REFORMA SUÁREZ	804
LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA	810
LA CRISIS DE UCD	815
 LA ERA SOCIALISTA (1982-1996)	
(Juan Pablo Fusi Aizpúrua)	
EL CAMBIO SOCIALISTA	819
ESPAÑA, PAÍS EUROPEO	822
LA CRISIS DEL SOCIALISMO	828
 EL RETORNO DE LOS CONSERVADORES (1996-2000)	
(Juan Pablo Fusi Aizpúrua)	
1996: EL PP EN EL PODER	835
EL DESAFÍO NACIONALISTA	838
EUSKADI: LA DEMOCRACIA AMENAZADA	840
ESPAÑA, NACIÓN PLURAL	845
EPÍLOGO: ESPAÑA HACIA EL SIGLO XXI	847
BIBLIOGRAFÍA	853
ÍNDICE ONOMÁSTICO	881

recurso a las locomotoras diesel –entre 1966 y 1970 se retiraron del servicio más de mil de vapor–, la renovación de coches y vías, la eliminación de líneas antieconómicas y la apertura de alguna nueva, como la de Madrid-Burgos. Aeropuertos y líneas aéreas fueron puestos al día para hacer frente al impresionante aumento del tráfico aéreo, de casi un 25 por 100 anual, provocado por el turismo y la nueva prosperidad de los españoles.

LOS LÍMITES DEL DESARROLLO

El franquismo era, en expresión de uno de sus apologistas, Gonzalo Fernández de la Mora, que sustituyó a Silva Muñoz en Obras Públicas en 1970, un «Estado de obras». La eficacia le valió a Silva ser elegido en dos ocasiones personaje popular del año. Sin embargo, el desarrollo se produjo más «a pesar de» la política gubernamental que por ella: la espectacularidad del crecimiento difícilmente podía ocultar los desequilibrios, insuficiencias y desajustes que lo limitaron y que, a raíz de 1973, amenazarían con estrangularlo.

Porque, en efecto, la planificación indicativa sobró. Lo verdaderamente revolucionario que hizo el régimen de cara al desarrollo fue la política de apertura y liberalización económicas de 1957-1959. El resto lo hicieron factores ajenos a la responsabilidad ministerial directa: en primer lugar, el *boom* europeo de la década de los 60 y principios de los 70, decisivo para el turismo, la emigración de trabajadores y las exportaciones españolas; en segundo lugar, tres factores externos, como los ingresos del turismo, las remesas de los emigrantes y las inversiones de capital extranjero; en tercer lugar, los excedentes de mano de obra (que abarataban los costes del trabajo) y el fuerte aumento de inversiones.

Ciertamente, el régimen podría alegar que la estabilidad política que logró, merced principalmente a su capacidad y dureza represivas, favoreció el desarrollo, en la medida, por ejemplo, que amplió las expectativas inversoras. Pero no es menos cierto que en áreas que eran responsabilidad directa del Estado presidió más veces el error que el acierto. El arancel de 1960, legado de la tradición autárquica, fue excesivamente proteccionista, lo que, además de perjudicar a un sector exterior de creciente dinamismo, favoreció que se mantuviesen muchos de los obstáculos tradicionales de la economía española: empresas de dimensiones no competitivas, escasa especialización, casi nula investigación industrial, tendencias a la carterización, etcétera. Con las reservas de que disponían, las autoridades españolas pudieron haber suavizado el proteccionismo, pero no lo hicieron.

Tampoco limitaron, contra lo que recomendó el Banco Mundial en 1962 y la OCDE posteriormente, el papel del INI, que si pudo servir a las necesidades autárquicas y contribuir a revitalizar la capacidad productiva en los

años cuarenta y cincuenta, no resultaba congruente con la estrategia neoliberal que inspiraba el modelo español de crecimiento. Durante la década del desarrollo, el INI no hizo sino sostener enormes pérdidas en empresas escasamente competitivas; y además, interferir en la libertad de instalación y contratación industriales.

La contratación salarial siguió encorsetada dentro de la Organización Sindical y los sindicatos verticales. El franquismo no quería ni podía aceptar la libertad sindical, incompatible con sus principios políticos e ideológicos. En consecuencia, el mercado de trabajo fue en extremo ineficiente, en perjuicio lógicamente de las posibilidades de expansión económica.

No hubo reforma fiscal, pese a que se habló de ello desde todos los ámbitos, incluidos los franquistas, como de una necesidad inevitable. La reforma tributaria de Navarro Rubio de diciembre de 1957 no había sido sino un intento, en parte exitoso, de aumentar la recaudación persiguiendo el fraude; la de junio de 1964 introdujo un impuesto general sobre las ventas (impuesto sobre tráfico de empresas) que mejoraba lo existente, pero apenas si alteró el impuesto sobre la renta. Prácticamente hasta la reforma de 1977, ya, por tanto, bajo la democracia, no se alteró el viejo e ineficiente sistema tributario español basado en impuestos indirectos excesivos y mal repartidos. El resultado fue el bajo nivel de imposición, el más bajo en 1968-1970, para ser precisos, de todos los países de la OCDE.

El problema no fue sólo la regresividad en la distribución de los impuestos que comportaba el sistema, con lo que ello tuvo de manifiesta injusticia. La falta de un sistema fiscal moderno y justo basado en los impuestos directos y progresivos sobre renta, beneficios y ventas, determinó la grave insuficiencia financiera del Estado, en perjuicio de los servicios y las necesidades públicas, y le dejó sin un arma coyuntural necesaria para intervenir con eficacia y flexibilidad en el desarrollo y la estabilidad de la economía. Temerosos de afrontar una reforma que sin duda lesionaría intereses conservadores y que sería impopular, los teóricos del desarrollo optaron por continuar con un sistema rígido, regresivo e ineficiente.

Eso, entre otras cosas, condicionó la política económica coyuntural que, para el economista Ros Hombravella, fue desde 1965 «rígida, tardía e ineficaz», y para Ramón Tamames, «una singladura de errores». Ciertamente fue ineficaz, desde el momento en que no pudo corregir los dos mayores problemas del desarrollo español: la presión inflacionista (18,07 por 100 anual en 1964-1967 y 5,3 por 100 en 1968-1971) y los enormes déficits de la balanza comercial. La devaluación de 1967 llegó con un año de retraso. La política monetaria fue hasta 1970 demasiado tolerante, y en ningún momento llegó a tomarse en serio la contención del gasto público. La inoperancia de las medidas de control de precios tomadas en distintas ocasiones resultó flagrante.

Podría decirse, en efecto, que España era en 1970 un país desarrollado, pero «mal desarrollado», por usar un expresión de Julián Marías. O desa-

rrollado con desequilibrios fortísimos. En primer lugar, el campo se mecanizó, mejoraron la productividad y la industrialización y comercialización de productos agrarios, se introdujeron criterios y métodos más racionales y modernos, y subieron, a veces espectacularmente, los salarios. Pero no hubo una verdadera política de desarrollo de la agricultura; la política de precios a través del FORPA resultó insatisfactoria para los agricultores e inflacionista para el país. La balanza agraria siguió siendo fuertemente deficitaria (con déficits de hasta 20.000 millones de pesetas en 1969); la inversión, muy baja; las disponibilidades de créditos, escasas; la rentabilidad de las explotaciones, en general, negativa. El éxodo rural fue el motor de la transformación del campo español: a fines de 1969, había fuera de España 3,4 millones de españoles.

En segundo lugar, continuó el desequilibrio regional. Al término del I Plan de Desarrollo, más de treinta provincias se encontraban por debajo de la media nacional de renta *per cápita*. El ranking regional de 1969 (por orden de ingresos por persona: Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Madrid, Barcelona, Baleares, Navarra, Gerona, Santander y Tarragona ocupaban los primeros lugares) demostraba que no habían disminuido, al contrario, las diferencias de renta entre las provincias. El hecho era una indicación del escaso alcance que tuvo la política regional contemplada en el Plan, consistente en la creación de polos de desarrollo y promoción.

El Plan había previsto la creación de siete polos –en Burgos, Huelva, Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla– en los que se esperaba alcanzar una inversión de 47.400 millones de pesetas y la creación de 78.800 puestos de trabajo. Los objetivos no se cumplieron, salvo en Vigo y Valladolid, donde se consiguió hasta un 85,9 por 100 de lo previsto; en el resto, la cobertura no pasó del 50 por 100. Muy poco para alterar los desequilibrios regionales del país.

La razón inmediata del relativo fracaso –relativo, porque los polos cambiaron algunas economías locales– fue la falta de una planificación regional verdadera. Pero la razón última radicó en que, en el fondo, los hombres del desarrollo creían en y apostaron por el desarrollo desequilibrado o, en otras palabras, por el desarrollo de las regiones prósperas y el abandono de las pobres. Esto podía no ser insensato desde un punto de vista económico, pero parecía inaceptable desde un punto de vista social. Aun así, aunque el II Plan (1968-1971) aún contempló la creación de otros cinco polos, la idea fue abandonada en el tercero y último de los Planes (1972-1975), sustituido por un conjunto de acciones específicas en comarcas especiales, como Gibraltar, y en ciudades congestionadas.

En tercer lugar, el desarrollo conllevó una alta emigración y la desertización del interior del país. El saldo migratorio exterior –de emigración asistida– entre 1959 y 1969 (salidas menos retornos) se elevó a 586.405 personas; las emigraciones interiores de 1963 a 1970 sumaron 3.195.039 migrantes. Es decir, que en la década del desarrollo casi cuatro millones de

personas dejaron sus pueblos de origen hacia Europa, hacia las regiones prósperas o hacia las capitales de sus provincias. Evidentemente, ello fue en su beneficio, liberándose de las terribles glebas de la España agraria, mucho de cuyo pintoresquismo, tan grato a los nostálgicos del mundo rural, no era sino miseria intolerable. Pero no por eso dejó de provocar graves desequilibrios: de una parte, una concentración urbana e industrial próxima a la saturación en Madrid, Barcelona y País Vasco, y en menor grado, en Valencia (además del desarrollo urbano, a veces espectacular, registrado por algunos polos de desarrollo, algunas ciudades de servicios y las zonas turísticas de Gerona, Baleares, Levante, Andalucía y Canarias); de otra parte, la aparición de bolsas de subdesarrollo en Galicia –pese a los focos industriales de Vigo, La Coruña, El Ferrol y Villagarcía de Arosa–, León, las dos Castillas y Extremadura, a pesar también aquí de puntos y áreas de crecimiento notable. En 1969 treinta y una de las cincuenta provincias estaban por debajo de la media nacional de renta *per cápita*. Entre 1960 y 1973, Madrid había visto aumentar su población en casi un 40 por 100 y el País Vasco, Navarra y Cataluña, en algo más del 20 por 100. Extremadura había perdido casi un tercio de la suya; La Mancha una cuarta parte; Andalucía y Galicia un 10 por 100. El desarrollo, en definitiva, había reforzado el despegue de las regiones ya industrializadas, con algunas pocas adiciones (Navarra, Baleares, Valencia, Santander) y algunos casos locales (Valladolid, Vigo, Zaragoza, Burgos y otros); y había acelerado el despoblamiento de vastísimas áreas del país.

Estancamiento de la agricultura, desequilibrio regional y éxodo rural contradecían el triunfalismo desarrollista del régimen de Franco. Hubo más: regresividad fiscal, proteccionismo elevado, sector público ineficiente y deficitario, dirigismos innecesarios, políticas coyunturales torpes. Y más aún: graves insuficiencias y déficit en el equipamiento social y asistencial del país (en sanidad, vivienda y educación, fundamentalmente), estímulos descontrolados al consumo, excesiva dependencia tecnológica y energética, especulación incontrolada en los precios del suelo urbano, horrores urbanísticos (en las zonas turísticas, en las grandes ciudades), desastres ecológicos (por ejemplo, en muchos ríos industriales).

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL

Con todo, España había superado de forma irreversible la etapa del subdesarrollo, como dijera el semanario *Cambio 16* el 3 de enero de 1972. Pero tampoco les faltaba razón a quienes ironizaban diciendo que el desarrollo español había sido, e iba a seguir siendo, un verdadero milagro. En todo caso, parece evidente que de haberse dejado más libertad al mercado, de haberse abordado las reformas económicas pendientes, de haberse hecho un uso más racional de los recursos públicos, los rendimientos hubieran sido

ofreció a los activistas de la organización vasca la posibilidad de reinserción (idea puesta en marcha ya en 1981 por el gobierno de UCD): entre 1982 y 1986 se acogieron a ella más de 200 miembros de ETA. La policía detuvo, además, a algunos importantes «comandos» de la organización. Hubo, sin embargo, importantes «manchas negras». Fueron denunciados varios casos de torturas (Mikel Zabalza murió en noviembre de 1985 cuando permanecía detenido por la Guardia Civil); y entre 1983 y 1987, el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), un grupo armado del que se sospechó pudiera estar dirigido por los servicios secretos españoles, asesinó a 28 personas más o menos relacionadas con ETA.

ESPAÑA, PAÍS EUROPEO

Los mayores éxitos de la gestión socialista se produjeron en dos áreas que, por sus implicaciones, eran esenciales para la consolidación del proyecto democrático iniciado desde 1975: política exterior y política de defensa y militar. El ministro de Exteriores Fernando Morán (1982-1985) prestó particular atención a las relaciones con Marruecos y Argelia, en razón de los importantes intereses de España en la zona (Ceuta, Melilla, gas argelino, límite de aguas jurisdiccionales). En 1986, ya con Fernández Ordóñez –hombre de viva inteligencia y cordialidad y dinamismo extraordinarios– al frente de la diplomacia española, España reconoció a Israel y normalizó sus relaciones con los Estados Unidos, enfriadas durante la etapa «tercermundista» de Morán. Felipe González intensificó las relaciones con América Latina, donde su prestigio –reforzado por la acción del rey– dio a España una influencia inusitada.

Todo ello tuvo indudable trascendencia. Pero el giro verdaderamente histórico de la acción exterior española tuvo otros dos pilares. El 12 de junio de 1985, España firmó el tratado de integración en la Comunidad Europea (con efecto desde el 1 de enero de 1986). El 12 de marzo de 1986, el gobierno logró que se aprobara en referéndum (con un 52,49 por 100 de votos favorables) la permanencia en la OTAN. En el primer caso, integración en Europa, la decisión fue, simplemente, la culminación de un proceso «natural» que se había iniciado en 1977-1979. En el caso de la OTAN, el ingreso exigió una rectificación radical del propio partido del gobierno: una de las promesas electorales del PSOE en 1982, expresión de sus prejuicios ideológicos y de su desconocimiento de la política internacional, había sido precisamente «OTAN, de entrada no». La importancia de ambas decisiones –Europa, OTAN– estaba en que España se definía, al fin, como un país occidental y europeo y en que, al hacerlo, recobraba el papel internacional que mejor parecía adecuarse con su historia, con su posición geográfica, con su significación cultural.

Con la entrada en Europa y en la OTAN, España resolvía un problema –su papel en el mundo– pendiente desde que perdió su imperio ultramarino primero entre 1808 y 1826, y luego en 1898. El ingreso definitivo en la OTAN (y luego, en la Unión Europea Occidental, la organización defensiva de la Comunidad Europea) tenía un valor adicional: venía a dar al Ejército español la misión exterior de que prácticamente carecía desde la perdida del imperio y el fin del protectorado colonial sobre Marruecos. Ello se completó con la muy eficaz y muy discreta –e importantísima– reforma militar que el gobierno y su ministro de Defensa, Narcís Serra (1982-1991), llevaron a cabo, y que arrancó con la ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de 5 de enero de 1984 y fue desarrollándose a través de las leyes de Plantillas para los tres ejércitos (1985-1986), el nuevo Código Penal Militar (1985), el Plan Estratégico Conjunto (1985 y 1989), la ley de Régimen del Personal Militar (19 de julio de 1989), la ley de Servicio Militar (1991), hasta culminar en el dictamen Fuerzas Armadas y Servicio Militar de 1991 y en la Directiva de Defensa Nacional de 1992. En síntesis, todo ello significó, políticamente, la vertebración de las Fuerzas Armadas bajo la dirección política del gobierno y militarmente, una profunda reestructuración de los tres ejércitos, la reducción de sus oficiales y plantillas, su progresiva profesionalización, la renovación y modernización de equipamientos y material bélico (a pesar de las limitaciones presupuestarias) y cambios sustanciales en los objetivos de la defensa (y por tanto, en los planes estratégicos y en la distribución territorial de las Fuerzas Armadas), reforzando el eje Baleares-Gibraltar-Canarias y adecuando el Ejército a las exigencias de la participación española en la defensa occidental dentro de la OTAN. En 1982 las Fuerzas Armadas tenían 66.000 oficiales y suboficiales y 270.000 soldados; en 1992, 58.000 y 200.000, respectivamente, la mitad de ellos profesionales. Las regiones militares habían pasado de nueve a seis; las brigadas del Ejército de Tierra, de 22 a 15. En diez años, el Ejército español se había transformado en una fuerza reducida pero flexible, operativa y moderna, obediente al poder civil y entregada a sus funciones profesionales y militares: el espectro del intervencionismo militar parecía haber desaparecido para siempre de la historia española.

No sorprende, pues, que cuando en abril de 1986, al completarse la legislatura, el gobierno convocó nuevas elecciones, la mayoría de los observadores dijeron que los socialistas habían logrado ante todo una cosa: la consolidación de la democracia. En aquel momento, los abusos, escándalos y errores que acabarían por empañar, en pocos años, la gestión socialista no eran todavía evidentes. En las elecciones del 22 de junio de 1986, el electorado les ratificó la confianza. El PSOE logró 184 escaños y el 44,15 por 100 de los votos, aventajando en casi 18 puntos al principal partido de la oposición, Alianza Popular (107 escaños), aún dirigida por Fraga Iribarne; el Centro Democrático y Social, un partido centrista creado por Adolfo Suárez tras su salida de UCD, logró un 10 por 100 de los votos y 19 escaños; Con-

vergència i Unió, 18 escaños; el PCE, siete y el PNV, seis escaños. Poco después, en el otoño-invierno de 1986-1987, el PSOE podría constatar, sin embargo, que su gestión provocaba también rechazo y protestas. Los estudiantes –primero, de enseñanzas medias; luego, de universidad– se movilizaron masivamente y con creciente violencia, en principio contra los nuevos planes de estudio, en seguida contra la masificación de las universidades y la degradación de la calidad de la enseñanza, y aun en demanda del libre acceso a la universidad, la gratuitad total de la educación y la creación de un salario estudiantil. La violencia de las manifestaciones que tuvieron lugar en el centro de Madrid en febrero de 1987 sorprendieron a la opinión y conmocionaron a los socialistas.

Con todo, no pasó de ser un episodio significativo pero circunstancial. Además, con la reactivación económica que se inició en 1985 y se prolongó hasta 1991, España pareció convertirse en una de las economías y sociedades más dinámicas de Europa. La incorporación a Europa, que permitió a España beneficiarse de los fondos europeos para el desarrollo regional, el auge extraordinario de las exportaciones y el aumento, también extraordinario, de las inversiones extranjeras, se combinaron para provocar un ciclo de visible prosperidad. Entre 1986 y 1990 el PIB creció a una media del 4,5 por 100 anual; la inversión extranjera entre 1986 y 1991 alcanzó los 60 billones de dólares. La red de autopistas y autovías del Estado pasó de 1.970 kilómetros en 1985 a 5.438 en 1992; el parque de automóviles, de 9.200.000 en 1985 a casi 14 millones en 1994. En abril de 1992 se inauguró un modernísimo tren de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla. El número de turistas que visitaron España pasó de 43 a 52 millones entre 1985 y 1990; casi 22 millones de españoles viajaron al extranjero en 1990. El número de alumnos en las universidades pasó de 720.419 en 1985 a 1.295.585 en 1992. Aunque el desempleo siguió siendo alto (21,9 por 100 en 1985; 22,7 por 100 en 1992), entre 1985 y 1991 se crearon 1,75 millones de empleos nuevos. La prosperidad permitió a los socialistas extender considerablemente las prestaciones sociales. Entre 1982 y 1992, el gasto público en pensiones, sanidad y educación aumentó en 4,1 puntos del PIB. En 1985 recibían subsidio de desempleo un millón de personas; en 1992, millón y medio. El número de pensionistas alcanzó los siete millones en 1995: sólo la ley de Pensiones no Contributivas de 1990 «creó» 400.000 pensionistas nuevos.

En 1987 el ministro de Economía, Carlos Solchaga, había dicho que España era «uno de los países donde más y más rápido» se podía «ganar dinero». La afirmación resumía bien el cambio que se había operado en España con el PSOE. En un país del que Ortega y Gasset había dicho que era puro pueblo y donde, según Azaña, el burgués nunca tuvo prestigio, la izquierda asumía ahora la cultura del dinero, la filosofía del enriquecimiento. Banqueros, financieros, nuevos empresarios –muchos enriquecidos rápidamente al hilo del formidable despegue de la economía española– alcanzaron notoriedad excepcional. Los nombres de Alberto Alcocer y Alberto Cortina

(«los Albertos»), Mario Conde, Juan Abelló, Javier de la Rosa, Emilio Botín, Alicia y Esther Koplowitz, Jacques Hachuel y muchos otros se convirtieron súbitamente en nombres de dominio público. Protagonizaban la vida social. Lo mismo sus peripecias sentimentales (divorcios clamorosos, aventuras amorosas ocasionales) que las grandes operaciones financieras por ellos protagonizadas –como las fusiones de los bancos Bilbao y Vizcaya, y Central e Hispano en 1989 o el ascenso de Mario Conde a la presidencia de Banesto en 1987 o las actuaciones del grupo kuwaití KIO, operaciones que movieron cifras fabulosas de dinero– se convirtieron en excitantes hechos sociales amplísimamente difundidos por los medios de comunicación y aca- pararon la excitación del momento.

La cultura del enriquecimiento, el *glamour* del dinero y del éxito, dañó sutilmente, sin embargo, la ética colectiva y provocó al tiempo admiración y rechazo social. Los sindicatos –UGT, dirigida por Nicolás Redondo, uno de los hombres «históricos» del socialismo español, y Comisiones Obreras, liderada por Antonio Gutiérrez–, que previamente, en 1983 y 1984, habían pactado con gobierno y empresarios acuerdos de tipo económico y social sobre la aceptación de la moderación salarial, exigieron ahora, ante la recuperación económica, un giro radical en la política del gobierno que incluyera la expansión del gasto público y mejoras en la redistribución de la riqueza y de los beneficios empresariales. La ley de Pensiones de 1985 –que aumentaba los plazos de cotización para tener derecho a pensión– y el Plan de Empleo Juvenil anunciado por el gobierno en 1988, que introducía la fórmula de los contratos temporales, fueron los detonantes de la ruptura. El problema era que los sindicatos entendían que la política económica del gobierno sacrificaba deliberadamente los intereses de los trabajadores. Redondo –que en 1987 renunció a su escaño en el Congreso– puso en duda públicamente que González y su gobierno representasen un verdadero proyecto socialista. El 14 de diciembre de 1988, UGT y CC OO organizaron una huelga general de 24 horas contra la política del gobierno, que tuvo un éxito total: España quedó literalmente paralizada.

El gobierno no fue insensible a la protesta sindical, como no lo había sido a la rebelión estudiantil de 1987: a ello se debería en parte el aumento de gasto social ya mencionado. Pero se vio reforzado en sus posiciones por la escasa repercusión política que el descontento social parecía tener. En las elecciones generales de octubre de 1989, el PSOE retrocedió 5 puntos respecto a las de 1986 (perdió más de un millón de votos), pero volvió a ganar por mayoría absoluta. La derecha, Alianza Popular (AP), parecía incapaz de superar la barrera del 25-28 por 100 de los votos. En la izquierda, la coalición Izquierda Unida (IU), impulsada desde 1986 por el Partido Comunista, aunque había conseguido capitalizar votos de la protesta sindical contra el PSOE, no superaba un discreto horizonte electoral: en 1989 sólo obtuvo el 9 por 100 del voto y 17 escaños.

Fraga Iribarne se había decidido en 1987 a impulsar la renovación («re-

fundación») de la derecha. En su IX Congreso, enero de 1989, AP cambió su nombre por el de Partido Popular (PP). En septiembre, el PP designó como su nuevo líder a José María Aznar, previamente presidente de Castilla-León, un hombre de 36 años, de personalidad discreta y reservada –sin el carisma de González, o antes, de Suárez–, pero hombre serio y tenaz que se había propuesto –y conseguiría– la apertura al centro del partido, y una renovación de sus ideas, programas y cuadros dirigentes (aunque las elecciones de 1989 llegaron antes de que Aznar hubiera podido efectuar cambio alguno). En el PCE se había producido un cambio de liderazgo. En 1988, tras una etapa de interinidad presidida por Gerardo Iglesias (luego de la dimisión de Santiago Carrillo en 1983), se nombró secretario general a Julio Anguita, alcalde de Córdoba, hombre de oratoria torrencial y eficaz, pero un leninista convencido, de ideas elementales –mera retórica obrerista, anticapitalista y antioccidental–, poco apto, por tanto, para encabezar la hipotética renovación de la izquierda española que la derechización del PSOE parecía permitir: la caída del comunismo en 1989 pareció, además, deslegitimar todo lo que el PCE y su líder Anguita representaban.

Había habido, pues, cambios pero de hecho, en 1989, no existía alternativa política real al PSOE. La sustitución de 1985 al frente del gobierno vasco de Carlos Garaicoetxea por José Antonio Ardanza –como aquél, del PNV, pero hombre discreto y conciliador– había permitido restablecer un mejor clima de relaciones entre el gobierno de Madrid y el gobierno vasco. En 1987 PNV y PSOE vasco formaron un gobierno autónomo de coalición. Aunque el terrorismo de ETA provocó nuevos sobresaltos –especialmente desde que comenzó a usar coches-bomba, como en los atentados contra el supermercado Hipercor de Barcelona en junio de 1987 (15 muertos) y contra los cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza ese mismo año (11 muertos) y Vic en 1991 (9 muertos, 40 heridos)–, se lograron importantes avances en la lucha antiterrorista. Los pactos que a principios de 1988 firmaron los partidos democráticos en Vitoria (Ajuria Enea), Madrid y Pamplona, subrayaron su determinación para reafirmar su compromiso con la democracia y la paz frente a la violencia de ETA. Las policías francesa y española fueron deteniendo a importantes dirigentes y comandos «etarras» (Santi «Potros», Josu «Ternera», Henri Parot, «Waldo», Josu Mondragón,...). El principal líder de ETA, Txomin Iturbe, murió en Argel, en accidente, en 1987. En enero de 1989 el gobierno, convencido de haber derrotado políticamente a ETA, abrió (también en Argel) un diálogo con la organización de cara a una hipotética negociación que llevara a ETA al abandono de las armas. Rotas las negociaciones, el 29 de marzo de 1992 se logaría un espectacular éxito policial: la detención en la localidad francesa de Bidart de la «cúpula» de ETA, integrada por Francisco Múgica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Arregui Erostarbe. El gobierno podía pensar que la batalla contra el terrorismo estaba también militarmente ganada.

Culturalmente, España, y de forma especial Madrid, parecían atravesar

una etapa de actividad casi palpitante. La oferta cultural (exposiciones, libros, música, cine) del Estado y de las instituciones privadas era desde luego muy notable. En 1987 se celebró en París la muestra –exposiciones, conciertos, conferencias– «París a la hora de España», un nuevo reconocimiento, como Europalia 85, del renacimiento cultural de España. En 1988 se inauguró en Madrid un nuevo Auditorio Nacional de Música. Las películas *Volver a empezar*, de José Luis Garci, y *Belle Epoque*, de Fernando Trueba, lograron en 1983 y 1994 respectivamente el óscar a la mejor película extranjera. En 1988 Pedro Almodóvar –cuyo cine desenfadado, irreverente y audaz parecía revelar el espíritu de la nueva España democrática– había tenido un gran éxito internacional con *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, que repetiría en 1999 con *Todo sobre mi madre*, igualmente galardonada con el óscar. En 1992 se abrió al público en Madrid el espléndido Museo Thyssen-Bornemisza. En 1977 se concedió el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre; en 1989 a Camilo J. Cela. Arquitectos como Ricardo Bofill, Rafael Moneo, Santiago Calatrava, Juan Navarro Baldeweg y Enric Miralles gozaban de altísima reputación internacional. La importancia de las investigaciones, labor académica y docente realizada por biólogos como Antonio García Bellido y Ángel Martín Municio y el bioquímico Alberto Sols (y por un especialista en genética como Francisco J. Ayala), por físicos como Álvaro de Rújula, Manuel Cardona, Cayetano López, Félix Indurain y Federico García Moliner, por virólogos como Rafael Nájera, biomédicos como Mariano Barbacid, atestiguaban la recuperación de la ciencia española.

En 1995 el Salón del Libro de París estuvo dedicado a lo que los organizadores llamaron «nueva literatura española» aparecida (o consolidada) entre 1975 y 1995, que podría equipararse con los autores y novelas que los lectores de *El País*, el gran periódico de la transición creado en 1976, seleccionaron en 1991 como lo que «había que leer» desde la muerte de Franco en 1975: *La verdad sobre el caso Savolta* y *La ciudad de los prodigios*, de Eduardo Mendoza; *Todas las almas*, de Javier Marías; *El río de la luna*, de José María Guelbenzu; *Herrumbrosas lanzas*, de Juan Benet; *El testimonio de Yarfoz*, de Sánchez Ferlosio; *Si te dicen que caí y Un día volveré*, de Juan Marsé; *Diario de un hombre humillado*, de Félix de Azúa; *Juegos de la edad tardía*, de Luis Landero; *Galíndez*, de Vázquez Montalbán; *El metro de platino iridiado*, de Álvaro Pombo; *La orilla oscura*, de José María Merino; *Gramática parda*, de Juan García Hortelano; y *Diario del artista en 1956*, de Gil de Biedma. En euskera, *Obabakoak*, de Bernardo Atxaga; *No soy de aquí*, de Joseba Sarrionaindía; y *Azúcar en la hierba*, de Ignazio Mújika. En catalán, *Mirall trencat*, de Mercé Rodoreda; *Dietari*, de Pere Gimferrer; y *El jardi dels sept crepuscules*, de Miquel de Palol. En gallego, *Amor de Artur*, de Méndez Ferrín; *Os oscuros soños de Chio*, de Carlos Casares; *O triangulo inscrito na circunferencia*, de Víctor F. Freixanes; y *Un millón de vacas*, de Manuel Rivas. El pintor mallorquín Miquel Barceló ha-

bía obtenido un amplio reconocimiento internacional desde principios de los años 80; la crítica española valoraba igualmente la calidad de pintores como José María Sicilia y Guillermo Pérez Villalta y de escultores como Txomin Badiola, Susana Solano y Cristina Iglesias.

Los deportistas españoles lograron numerosas medallas en los Juegos Olímpicos de 1992, celebrados en Barcelona. El ciclista Miguel Induráin ganó en 1991 el Tour de Francia (lo ganó cinco veces consecutivas) y en 1992 el Giro de Italia (que ganaría de nuevo en 1993). Tenistas (Bruguera, Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez), el automovilista Carlos Sainz, jugadores de golf (Ballesteros, Olazábal), y muchos otros deportistas, lograron igualmente en esos años grandes éxitos internacionales.

Los actos que en 1992 se celebraron en España —Juegos Olímpicos en Barcelona, V Centenario del Descubrimiento de América, Exposición Universal de Sevilla— confirmaron el prestigio internacional que el país había alcanzado. A ello contribuyó, desde luego, el gran impulso dado a la política exterior por los gobiernos socialistas y por el propio Felipe González, a quien los años en el poder dieron conocimientos y autoridad internacionales indudables. En 1989 España presidía por primera vez la Comunidad Europea. Al año siguiente, participó con una fragata y dos corbetas en la guerra del Golfo, desencadenada cuando Irak invadió unilateralmente Kuwait. En 1991 Madrid fue designada como sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, cuya organización —excelente— fue un gran éxito de la diplomacia española. En 1992 España fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fuerzas españolas participaron en misiones de paz de la ONU en Nicaragua, Namibia y El Salvador. En 1993, durante la guerra de Bosnia, España envió un contingente de legionarios a la ex Yugoslavia.

LA CRISIS DEL SOCIALISMO

Hacia 1990, el PSOE parecía haberse convertido en la partido «natural» de España. Con las grandes conmemoraciones de 1992, los socialistas alcanzaron su plenitud al frente del gobierno. Y sin embargo, en apenas tres años el poder socialista se desmoronaría: el PSOE no pudo sobrevivir a los numerosos escándalos de corrupción que estallaron a partir de 1990. En las elecciones generales de 1993, el PSOE perdió ya la mayoría absoluta. En 1994 el principal partido de la oposición, el PP, ganó unas elecciones europeas, la primera vez que los socialistas perdían unos comicios nacionales desde 1982. En 1995 el PP volvió a ganar, esta vez las elecciones autonómicas y municipales: ganó, además, en diez de las trece comunidades en las que hubo elecciones (en 1993 había ganado en Galicia) y en 43 de las 50 capitales de provincia, logrando el 35 por 100 de los votos en toda España.